1. Introducción:

En el marco institucional brindado en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, de la Facultad de Derecho, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, un grupo de miembros de la comunidad académica, en el periodo bianual 2020 y 2022, integrado por licenciados en psicología, sociólogos, abogados y estudiantes de abogacía, que a la vez se desempeñan como operadores del sistema judicial en distintas funciones (litigando, instructores judiciales, asesores letrados y magistrados) se reunieron a investigar en torno a la siguiente pregunta ¿Cómo perciben los jueces técnicos y jurados populares, los estándares probatorios de la prueba pericial en salud mental?.

En ese contexto, se presentó un proyecto de investigación ante la Secretaría de Ciencia y Técnica dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, con el título “Estándares de la Prueba Pericial en el Jurado Popular”, dentro del programa “Formar”, el cual fue aprobado por dicha institución.

En el proyecto mencionado, el objetivo general planteado fue realizar un análisis descriptivo, cualitativo y documental sobre el impacto que tiene la prueba pericial -psiquiátrica y psicológica- en los distintos actores que intervienen en el proceso, en aquellos casos de juicios integrados por jurados populares llevados a cabo en la ciudad de Córdoba. Ante la gran cantidad de información recabada hasta el momento, no habiendo aún concluido el proceso de análisis total de los datos obtenidos, es que, a los fines de exponer el material recolectado en este Congreso, se dividió la ponencia en sub-grupos, siendo el objeto de esta presentación lo relativo al impacto de la prueba pericial de salud mental exclusivamente en jueces técnicos. Se tomó este estamento de jueces especialistas, porque se tiene en cuenta las distintas partes intervinientes del “juicio” (jueces técnicos, jurados populares, peritos, partes). En otra etapa a desarrollar se realizará una integración total del material recolectado.

Conforme lo sostenido en la doctrina científica, el marco teórico se encuentra encuadrado en varios textos, tomando como referente el publicado por Carmen Vazquez Rojas en “De la prueba científica a la prueba pericial” (Rojas, 2015), algunas de cuyas tesis se precisan a lo largo del presente.

2. Metodología:

El trabajo de investigación consistió en tareas exploratorias y descriptivas, ya que se tomaron entrevistas de grupos focales a jueces técnicos, peritos y jurados populares que participaron en causas en que la prueba pericial de salud mental se diligenció y consideró en el curso del proceso.

Respecto del universo de casos posibles, se solicitó formalmente a la Oficina de Jurados Populares del Poder Judicial de Córdoba, la información de nombres y contactos de aquellas personas que participaron en juicios con jurados populares realizados en los últimos años. Dicha información fue conferida con acuerdo de confidencialidad previo, debido al carácter de la misma. Así fue que de la multiplicidad de casos juzgados se eligieron

-discrecionalmente- tres de gran relevancia, a saber: Insaurralde, Walter Manuel p.s.a. abuso sexual con acceso carnal calificado, etc. (Expediente 9055601); Barattini, Brenda Micaela p.s.a. Lesiones gravísimas calificadas (Expediente 6842158) y López, Anita Quirina p.s.a Homicidio calificado por el vínculo. (Expediente 268865).

Así, individualizadas las partes de cada uno de los casos seleccionados, se realizaron contactos directos con jueces técnicos, jurados populares y peritos para concertar entrevistas. En dicho marco, se confeccionó un acta de confidencialidad -que fue puesta en conocimiento y aceptada por cada uno de los entrevistados- a fin de garantizar el secreto de los datos de las causas que serían recolectados.

Las entrevistas fueron de tipo estructurado, permitieron interacción entre entrevistador y entrevistado con una guía de preguntas preestablecidas, respondiéndose verbalmente. El diálogo con los entrevistados se llevó a cabo por medio de plataforma virtual -meet, whatsapp, etc.-, lo que a su vez permitió el resguardo del material. Las entrevistas se transcribieron de manera completa.

La segunda etapa de trabajo consistió en procesar, analizar e interpretar los datos obtenidos en las mismas, según el marco teórico para observar su correspondencia en la praxis judicial. Una tercera etapa es la de elaborar el informe final, esbozando algunas conclusiones preliminares en esta instancia.

3. Aproximaciones teóricas:

El trabajo se enmarca en un contexto teórico que repasa lo atinente a la prueba, la pericia y los jurados populares. En nuestro “sistema acusatorio adversarial”, durante la investigación y el juzgamiento, las partes defienden una postura frente al planteo del caso, también refutan la contraria, con el fin de instalar en la mente del tribunal su teoría de los hechos que son objeto del

proceso, todo utilizando el procedimiento y las pruebas.

En este sentido, “prueba” es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente. (Cafferata Nores, 2012). Dentro de las pruebas, particularmente la “pericial”, es entendida como la obtención o valoración de un elemento de prueba, mediante conocimientos científicos, técnicos o artísticos que, dispuesta por el órgano judicial interviniente, se incorpora al proceso con control de las partes.

Atento a que el marco de investigación se desarrolla en la ciudad de Córdoba, la normativa procedimental es la de esta provincia. Así, en Córdoba el sistema de juicio por jurados populares se encuentra regulado por la ley 9182, caracterizándose los siguientes puntos: 1) La integración del tribunal con jurados populares es obligatoria (art. 4) para delitos mencionados en el art. 2, destacándose anticorrupción, homicidios agravados, homicidio en ocasión de robo, etc.. 2) El tribunal se constituye con ocho jueces populares y tres jueces técnicos, trece jueces en total -cuatro suplentes-; la decisión se toma por simple mayoría (mitad más uno), para lo cual todos tienen un voto (diez votos), excepto el presidente del tribunal que sólo vota en caso de empate (art. 4). 3) Los jurados populares no conocen el expediente, debiéndose formar su convicción exclusivamente por lo que perciben en la audiencia de debate, permaneciendo de observadores (art. 34). 4) La competencia de los jueces populares se circunscribe a los aspectos fácticos de la acusación (existencia del hecho y participación del acusado), quedando a los jueces técnicos la calificación legal y el monto de la pena (art. 44). (Andruet, Ferrer y Crocchia, 2006).

La doctrinaria Carmen Vazquez Rojas (2018) explica que una manifestación del “derecho a la prueba” es que los elementos admitidos y practicados sean valorados racionalmente por el juzgador. La “relevancia” de la prueba es un criterio relacional que une la teoría del caso con el dato o información dado por el medio probatorio específico, relevante es la prueba que confirma o refuta una proposición de las partes (Taruffo, 2008).

Consecuentemente, la relevancia influye en el “grado de completitud probatoria”, es decir, el peso de la probabilidad de acierto de la decisión, dado que el aumento de la información relevante aumenta la probabilidad de acierto de la hipótesis defendida en la teoría del caso.

A este cuadro se suma la herramienta cognoscitivista de la contradicción, siendo la “crítica mutua” la técnica, dado que mientras las partes más critiquen las pruebas, mejor calidad se adjudica para aportar conocimiento, dado que su conocimiento resistió los distintos cuestionamientos que han intentado refutarla, ante los cuales se mantuvo subsistente.

“Estándar de prueba” (Ferrer Bletran, 2007), es un vocablo ambiguo que alude a dos concepciones, una del derecho romano-germánico (logrando íntima convicción firme del juzgador respecto del hecho -certeza-) y otra del derecho anglosajón (la hipótesis acusatoria se debe corroborar más allá de toda duda razonable), ambas concepciones fueron cuestionadas y reputadas insuficientes, por lo que Jordi Ferrer Beltran desarrolló un concepto compuesto de estándar probatorio integrado por “condiciones y requisitos”.

Las “condiciones del estándar de prueba penal” utilizado como criterio racional para decidir sobre la suficiencia probatoria, son: primero, la hipótesis debe ser capaz de explicar todos los datos disponibles, integrándose de forma coherente; segundo, deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas del mismo hecho. Los “requisitos de un estándar de prueba” necesita, primero, partiendo de la hipótesis, la formulación de predicciones verdaderas sobre los hechos (sin referencia a creencias o convicciones o prejuicios del sujeto decisor); segundo, necesita ser formulada con precisión para realizar controles intersubjetivos; tercero, considerar qué nivel de duda es compatible con una condena, dando preferencia de errores negativos (varias absoluciones falsas) absolviendo a un culpable, frente a los positivos (una condena falsa) condenando a un inocente.

Los hechos que se quieren conocer se conciben como ontológicamente (mundo externo) separados de las opiniones (interpretación subjetiva) (Gonzalez Lagier, 2005), la distinción entre “objetivo y subjetivo”, se comprende desde la tesis de la objetividad ontológica, el mundo es independiente de sus observadores, con diferenciación entre lo que se sabe y lo que se puede observar; vinculada a la tesis de la objetividad epistemológica, los sentidos permiten el acceso a conocer el mundo.

Por otro lado, las interpretaciones de los observadores se basan en datos sensoriales filtrados en una red limitada de conceptos, categorías, etc. (background), que dirigen las percepciones, seleccionando lo sensorial; así es muy importante la interrelación entre los hechos percibidos e interpretados.

El conocimiento experto es acorde a estándares de aceptabilidad racional, usando criterios intersubjetivos aceptados científicamente, en su forma de percibir el mundo y de interpretarlo; tornándose así en información “justificada” relevante para el juzgador de los hechos.

Carmen Vazquez Rojas (2018), sostiene que existe una “dependencia epistémica” del juzgador con el perito experto, dado que el perito brinda información que de otra manera no habría podido adquirir.

Refiere también, que la prueba pericial es, desde el punto de vista epistemológico, un testimonio, es decir, un acto de comunicación en el que un tercero, ajeno a la causa, comparte información a otros (audiencia), adquiriendo de dicha información determinado conocimiento.

Se le agrega el carácter de “testimonio experto” por su formación académica, experiencia y conocimientos (credenciales). Se la considera una fuente de conocimiento y una fuente de justificación de la decisión. El testimonio del experto -perito- encuentra diferencias de grado con el testimonio lego. En este sentido, la prueba pericial es información especializada que contribuye a la correcta toma de decisión sobre el hecho. En este sentido, existen distintas posturas sobre el testimonio

experto, adentrándonos en las de reduccionismo y no reduccionismo; así el reduccionismo entiende que en un testimonio experto confluye lo que el experto dice, sus credenciales y cómo el mundo existe desde la expectativa de la audiencia (especialmente de los sujetos que deciden), quienes creen y se convencen que es una información experta.

Por otro lado, el no reduccionismo, sostiene que el testigo experto justifica una decisión, sin necesidad de creer que el hablante es confiable, dado que existen razones intrínsecas en el propio testimonio para justificar el conocimiento adquirido, considerando las circunstancias derrotantes de ellas. Así el conocimiento se basa en los principios de veracidad y credibilidad de los testimonios, salvo que existan motivos justificados para derrotar estos principios, entendiendo falsas las afirmaciones del experto.

La concepción que se tenga del proceso judicial incide en las condiciones de justificación de los enunciados fácticos (Dei Vecchi, 2013); siguiendo a Taruffo, plantea dos alternativas disyuntivas, una llamada “justicia del procedimiento de decisión” (sistema adversarial – respecto de las reglas del juego) y otra “justicia substancial” (a) la norma es adecuada para el caso; b) es correcta su interpretación; c) determina la verdad de los hechos del caso). Entonces, vinculándolo con los jueces técnicos, ¿en cuáles de estos conceptos de justicia se encontrarán sus decisiones?

El mismo autor (Dei Vecchi, 2013) distingue entre justificación de la acción y justificación de su resultado. Justificación es una noción relacional, que hace referencia al vínculo existente entre un dominio de razones y un contradominio que hay que justificar.

Siguiendo la tesis de Ricardo Caracciolo, la aplicación de las normas implica la verdad de los enunciados fácticos subsumibles en el supuesto de hecho de la norma aplicada; luego, la condición de justificación de la decisión normativa es la verdad del enunciado fáctico. Así, la acción de decisión del Juez estaría justificada si los enunciados fácticos en estas últimas subsumibles están probados; luego, la condición de justificación de la decisión acto es la prueba del enunciado fáctico. De esta forma, sostiene Dei Vecchi (2013) que satisface la noción de justicia substancial la correcta realización del procedimiento, incluida la valoración de la prueba, por lo que el punto a donde se quiere llegar es a la prueba de los hechos y no necesariamente a su verdad. Al respecto cabe analizar si ¿los jueces técnicos llegan a la justificación de la prueba de los hechos o a su verdad?

4. Análisis y Conclusiones preliminares:

De las entrevistas realizadas se aclara que se pudieron contactar a seis jueces técnicos -de los nueve en total que intervinieron en los tres casos seleccionados-, dos de ellos se negaron a participar en las entrevistas, dado que sostuvieron y reiteraron que se remitirán a las respuestas brindadas por su compañero de trabajo. Esto llamó la atención del equipo de investigación, dado que si bien no se expresó otro motivo para negarse a participar, se entendió la respuesta como inconsistente. Esto ha limitado las posibilidades de obtener información de este estamento.

Este grupo comprende que la investigación cualitativa se torna más rica al transcribir los términos precisos de los entrevistados, pero atendiendo a la breve extensión de esta ponencia, se hará una interpretación.

Respecto de los dos jueces técnicos -que sí accedieron con buen agrado a ser entrevistados- se refirieron que en desarrollo del debate, las partes y testigos, utilizan discursos basados en la persuasión para convencer de su teoría del caso. Ahora bien, tanto los juzgadores técnicos y los jueces populares, sí distinguen estas técnicas, permitiendo al ser identificadas, su neutralidad valorativa, logrando diferenciarlas de las pruebas con contenido racional. Con esto se observa que hay algunas acciones tendientes a intentar despojar de subjetividad a cada teoría del caso, haciendo esfuerzos cognitivos por observar racionalmente los elementos de prueba. Así vinculando esto con la tesis de la objetividad epistémica, y de la intersubjetividad de los criterios, existe una tendencia a apoyarse intelectualmente en la comprensión conjunta de una prueba, que tenga base en lo científicamente aceptado.

Los entrevistados compartieron la afirmación de que la prueba testimonial común (de ciudadanos legos -no expertos-) es muy importante, incluso tomaron decisiones en base al conjunto de pruebas de un caso, no sólo por el testigo experto -psicólogo ni psiquiatra-, sino incluso se refiere al testimonio como “la más importante” de las pruebas. Esto sorprendió a este grupo de investigación dado que los teóricos esgrimen la “preferencia” de la prueba pericial en salud mental, y la “dependencia” de esta prueba para la toma de decisión en los casos, presuposiciones que claramente se ven descartadas de manera clara. En el mismo sentido se aporta el conocimiento que el testimonio en sí mismo constituye una herramienta fundamental en la toma de decisiones de los jueces técnicos.

Frente a preguntas relativas a la prueba testimonial experta en salud mental, respondieron, que en las audiencias no es discutida por las partes ni por los jueces, que se las toma por su carácter científico, con la importancia desde la base del área científica de la que provienen, como también por las credenciales del científico que las expone. En este sentido, se observa que la tesis de la importancia de la crítica y el contradictorio no se traslada a la audiencia en este sentido y reducen su intensidad, teniendo por válida la información que aportan los testigos expertos, respetando significativamente la calidad del rol que invisten.

Incluso al hacer rápidamente una comparación entre el testimonio común y el experto, los entrevistados coincidieron en que la tendencia de todos los participantes del juicio es a cuestionar la prueba testimonial común y no a criticar la testimonial experta en salud mental.

Explicaron que entienden que entre el juzgador y el perito experto existe una relación, porque el perito brindó información que de otra manera no habrían podido adquirir, entendiéndose válida y avalada por su área científica. Esta observación luce trascendente, dada la tesis no reduccionista, en donde los principios de veracidad y credibilidad sumados a la no derrotabilidad, se deducen como claramente aplicable a estos casos, siendo esta concordancia un hallazgo interesante para futuras investigaciones.

Particularmente en lo que respecta a la prueba pericial de salud mental

-psicológica y/o psiquiátrica-, concluyeron los entrevistados que en la generalidad de causas puede no estar presente y el juicio se resuelve de igual manera, recurriendo a las testimoniales comunes y a otras pruebas, que se tienen en cuenta en conjunto; aquí se nota la tesis de la completitud probatoria y peso del conocimiento interrelacionado.

Sin embargo, los jueces técnicos reconocieron que hay casos (ej. abusos sexuales) en los que el testigo experto en salud mental adquiere una condición determinante. En estos casos la tesis de la dependencia epistémica si se observa presente en sentido fuerte.

Por otro lado, surgió un tema revelador de situaciones no consideradas por los doctrinarios, relativo al lenguaje técnico de las pericias psicológicas y psiquiátricas, problemas de comprensión, atento a su base científica, que muchas veces es importante explicar por parte de los mismos peritos.

Incluso destacaron que los jurados populares presentaban muchos interrogantes por vocablos usados por los testigos expertos en salud mental, por ello, en cuestiones de lenguaje en los entrevistados se observó coincidencia en cuanto a que es tarea del juez técnico ayudar a la comprensión de la pericia a través del lenguaje llano y sencillo, refirieron que esto se produce por la imposibilidad legal de que los jurados populares no pueden hacer preguntas, de ahí la necesidad del lenguaje claro.

En este punto uno de los entrevistados narró que en determinados casos, dada la dificultad del lenguaje del testigo experto, se solicitó cuarto intermedio a los fines de que los jueces técnicos preguntasen a los jueces populares que aclaraciones necesitaban, así en continuación de audiencia, los jueces técnicos repreguntaron a los peritos para que ellos mismos aclararan los puntos técnicos del lenguaje, canalizando el diálogo de la audiencia hacia un lenguaje simple y claro.

Otra observación que llamó la atención es que uno de los entrevistados reconoció la exigencia en audiencia que recayó sobre los testigos expertos en salud mental, en responder interrogantes formulados por las partes que el perito no podía responder, dado que la ciencia misma no alcanza a solucionar; el juez técnico refirió que ahí, el perito debería reconocer ese límite de información de su área y ponerla de manifiesto en la audiencia.

Relacionado a las tomas de decisión y a las diferentes opiniones en el seno de la deliberación, uno de los entrevistados manifestó que existe mucha coincidencia entre jueces técnicos y jurados populares; incluso estadísticamente es alto el porcentaje de decisiones tomadas por unanimidad, habiendo gran mayoría de casos en los que coinciden sus decisiones. En esto se observa que la tesis de la justificación de las decisiones normativas en base a la prueba de los hechos, se plasma en los casos observados.

En consulta acerca de la posible influencia que puedan ejercer los jueces técnicos en la toma de decisión de los jurados populares, los entrevistados refirieron que no observaron influencia alguna, las deliberaciones fueron respetuosas y sin ninguna imposición de las partes; destacaron que los jueces populares van intercambiando opiniones en los tiempos de espera del juicio. Las conclusiones preliminares presentadas no son concluyentes, son sólo descriptivas de pinceladas de la praxis judicial, tendiendo a generar discusiones que fomenten interrogantes con la esperanza de viabilizar nuevos cuestionamientos e investigaciones.

Para concluir las observaciones de los estamentos jurados populares y peritos, han sido abordadas por otros sub-grupos del mismo equipo de investigación, las que serán aportadas en ponencias específicas.

BIBLIOGRAFÍA:

- Andruet A. y otros (2006). Jurados Populares. Córdoba. Centro de perfeccionamiento Ricardo C. Nuñez.
- Cafferata Nores, J. y Otros (2004). Manual de Derecho Procesal Penal. Córdoba: Ed. Ciencia, Derecho y Sociedad.
- Ferrer Beltran. (2007). La valoración racional de la prueba. Madrid. Ed. Marcial Pons.
- Gonzalez Lagier (2005). Hechos y argumentos, racionalidad epistemológica y prueba en los hechos en el proceso penal. Revista nº 46 "Jueces para la Democracia.
- Taruffo, M. (2005). La Prueba de los Hechos. Madrid: Ed. Trotta.
- Vazquez, C. (2018). Hechos y Razonamiento Probatorio. Buenos Aires: Ed. del Sur.
- Vazquez, C. (2015). De la Prueba Científica a la Prueba Pericial. Madrid: Marcial Pons.